



A LA MESA DEL CONGRESO

El GP MIXTO, a instancia del diputado del **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)**, Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente **MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN** al Gobierno **relativa a la mejora de la financiación en Galicia** para su debate en el PLENO.

Madrid, a 27 de noviembre de 2025

Néstor Rego Candamil

Diputado del BNG
Portavoz del Grupo Mixto



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El actual sistema de financiación autonómica, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, junto con la LOFCA, es claramente perjudicial e injusto para Galicia, ya que impone una clara infrafinanciación de los servicios que se mantiene desde hace décadas. Una insuficiencia de recursos que determina también que Galicia se sitúe a la cola del Estado español en los principales indicadores socioeconómicos pese a ser un país rico en recursos y con un inmenso potencial.

De la injusticia del modelo dan cuenta distintos datos, como el de que el peso de la dispersión territorial es de apenas el 0,6%, pese a ser este un factor que no es que aumente, sino que multiplica exponencialmente los gastos para alcanzar el mismo nivel de servicios. Pero también cabe destacar que Galicia representa solo el 5,8% del territorio del Estado español y el 5,6% de la población, sin embargo, cuenta con la mitad de los núcleos de población del Estado y si hablamos de núcleos con menos de 100 habitantes, el porcentaje asciende al 60%. El efecto de esto sobre el coste de los servicios básicos es evidente, así por ejemplo, con la misma inversión que en los territorios con población concentrada es posible dar servicio de abastecimiento o saneamiento de agua a 1000, 2000 o 5000 personas, en Galicia puede ser para 10, 20 o 50. Lo mismo ocurre si hablamos de Sanidad, Educación, Atención a la dependencia, cuidados o servicios públicos de cualquier tipo. Y, sin embargo, la dispersión territorial pesa solo un 0,6% frente a, por ejemplo, el 30% del total de residentes. Una situación que repercute de forma especialmente grave en el caso de las administraciones locales que se ven obligadas a asumir muchos de los servicios básicos de su territorio.

Galicia dispone, con el 5,8% del territorio ya mencionado, del 50% de los kilómetros de carreteras estatales, la mayoría de titularidad municipal o provincial, una realidad que implica un enorme coste en mantenimiento y un sobreesfuerzo que es preciso incorporar y compensar en los criterios de financiación.

De hecho, mencionaremos también la insuficiente ponderación de otros factores, como el de la población mayor de 65 años (solo un 8,5% de peso), cuando Galicia tiene los índices de envejecimiento más elevados.



Todos los factores mencionados implican una evidente infrafinanciación que no solo resulta injusta y discriminatoria, sino que incide muy negativamente en la calidad de vida y el bienestar de todos los gallegos y gallegas. Unos datos que vienen confirmados en el último Informe del Consello de Contas, de mayo de 2024, que advierte de una infrafinanciación de 1.535 millones anuales. De hecho, el órgano fiscalizador cifra en alrededor de 20.000 millones el déficit de financiación autonómica de Galicia entre 2009 y 2021, lo que suma un déficit medio anual por habitante de 559 euros. Además, en la senda de crecimiento de la financiación autonómica que se mantuvo hasta 2019, Galicia fue de las que menos creció.

El Informe de Contas señala, además, la falta de transparencia del modelo actual, lo que evidencia que este debate no es técnico ni neutral, sino que se basa en criterios y decisiones políticas. Como los que diferenciaron entre Comunidades de régimen común y foral; los que determinaron la cesión de competencias y porcentajes sobre determinados tributos; los que fijan las distintas variables que inciden en el cálculo de necesidades para la prestación de los servicios públicos fundamentales de las Comunidades de régimen común y su ponderación en función del peso político ejercido por las fuerzas predominantes en cada territorio; los que establecen la forma de distribución de los fondos de convergencia o el volumen total de recursos a repartir entre las Comunidades, sin relación con el coste real de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas.

Queda claro, por tanto, que las características del sistema de financiación actual dependen de la correlación de fuerzas políticas existente en el momento de su negociación y aprobación. La elaboración y utilización de informes técnicos o académicos solo sirvieron como pretexto para justificar posiciones políticas *ex ante*.

En este contexto, el BNG defiende la necesidad, no ya de revisar el sistema, sino de cambiar el modelo para Galicia, apostando por un concierto económico, puesto que los datos avalan la propuesta.

Galicia está por debajo de la media nacional en PIB *per cápita* y, precisamente la ineficiencia, insuficiencia e injusticia del actual sistema de financiación son los principales factores que refuerzan nuestra vulnerabilidad y no resuelven la falta de convergencia y la actual situación de atraso. Así, la realidad es que la diferencia entre los impuestos estatales que pagamos en Galicia y lo que el Estado nos devuelve a través de la financiación supera los 5.000 millones de euros.

Según el balance del sistema de financiación de Galicia elaborado por el economista gallego



Xosé Díaz para el ejercicio 2022, el Estado recaudó en Galicia un total de 15.385 millones de euros, sin embargo la cantidad de fondos que recibió del Estado a través del sistema de financiación fue de 10.041 millones. La diferencia alcanzó los 5.344 millones de euros a favor del Estado. Considerando el periodo de vigencia del actual sistema de financiación (2009-2022), ascenderían a 59.391 millones de euros a precios actuales.

Tenemos que tener en cuenta el llamado «efecto sede», por el que casi 4.000 empresas que operan en Galicia pagan el Impuesto de Sociedades fuera, fundamentalmente en Madrid. En concreto, 3.787 empresas (1.211 SA, 2.560 SL y 16 cooperativas), entre las que se incluyen empresas energéticas, de telecomunicaciones, las grandes distribuidoras, bancos, grandes y medianas empresas manufactureras, constructoras, extractivas, etc. con su domicilio fiscal fuera de Galicia. Por tanto, Madrid absorbe recursos producidos fuera, y luego apunta que es el que más contribuye, eso sí, con los beneficios que recaudan las empresas en territorios expoliados como el gallego.

Acabar con este expolio fiscal permanente es la razón que lleva al BNG a defender un modelo de concierto, perfectamente posible en el marco jurídico-político actual -de facto está en vigor con evidente éxito en las dos Comunidades de EuskalHerria- y, sin duda, beneficioso para Galicia. Un sistema en el que, incluso descontando la cuota a pagar por los llamados servicios comunes o no transferidos, Galicia saldría ganando.

El incremento de los recursos disponibles para la Administración gallega permitiría mejorar los servicios públicos y elevar el nivel de vida y bienestar de todos los gallegos y gallegas. Este es el objetivo de la propuesta del BNG, con absoluta confianza en la capacidad de nuestro País para valerse por sí mismo y para autorresponsabilizarse de su futuro, también desde el punto de vista fiscal.

Galicia tiene la capacidad y debe tener también la facultad normativa y la responsabilidad fiscal sobre el conjunto de los impuestos soportados en Galicia para garantizar la consecución de los principios de justicia, proporcionalidad y progresividad fiscal. Esto no implica no tener que contribuir, en su caso, a un mecanismo de redistribución interterritorial, respetando el principio de solidaridad y, en todo caso, considerando la deuda histórica en inversiones que tiene el Estado con Galicia.

El Ministerio avanzó en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera un nuevo sistema «multilateral y bilateral». Sin embargo, el concepto de multilateralidad no es incompatible con la negociación bilateral entre naciones como Galicia y el Estado. Galicia



necesita exigir y ejercer el derecho a la soberanía fiscal. Una reforma del sistema de financiación actual que se limite a la elevación del porcentaje de cesión de determinados impuestos estatales no es suficiente, pues seguiría constituyendo un modelo que no consideraría la capacidad financiera total de Galicia, ni sus necesidades reales.

Además, si hablamos de los recursos disponibles para sufragar los gastos de las administraciones públicas de Galicia, no es menor la cuestión de la financiación local. En términos *per cápita*, cada municipio gallego recibe de media por habitante 50 € menos que la media estatal. La situación se agudiza en el caso de las siete grandes ciudades. A modo de ejemplo, Málaga recibe la misma financiación del Estado que las siete grandes ciudades gallegas juntas, pese a que casi la duplican en población. Una brecha que se agranda aún más si la comparación se hace entre lo que recibe un ayuntamiento por habitante y ayuntamiento madrileño. Esto supone 142 euros más, en el caso de Madrid, o 108 euros más, en Cataluña, que en Galicia. Resulta por tanto evidente que también es necesario revisar y mejorar la financiación local y la participación en los impuestos del Estado.

Por último, también es necesario abordar posibles soluciones para, como mínimo, aliviar la situación de endeudamiento de Galicia. En este sentido, resulta incomprensible la negativa del Gobierno de la Xunta de Galicia de beneficiarse de la llamada «quita» de deuda pública, pactada por el BNG y el PSOE en el acuerdo de investidura.

Las cuentas públicas de Galicia para 2025 destinaron 1.763 millones de euros al pago de la deuda, de los cuales, según la Ley de Presupuestos, 214 millones de euros permitirían sufragar los tipos de interés derivados de la deuda formalizada, en su mayoría con entidades bancarias privadas, y el resto a la amortización de la deuda -que a finales de 2024 ascendía a un total de 12.165 millones de euros-.

Cabe destacar, por tanto, que el coste de la deuda gallega es muy superior al de otras Comunidades Autónomas, ya que el ejecutivo decidió suprimir mecanismos de financiación extraordinarios públicos, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una línea de crédito creada por el Estado en 2012 para prestar dinero directamente a las comunidades autónomas, con tipos de interés mucho más reducidos que los fijados por el sistema financiero. Por tanto, la condonación permitiría reducir la partida reservada para el pago de la deuda e incrementar, así, los fondos disponibles para gasto social, una prioridad en nuestro País.

En conclusión, el BNG considera imprescindible establecer una nueva relación con el



Estado en materia de financiación para poner fin al centralismo financiero y que Galicia tenga capacidad de decidir sobre todos sus recursos. Así, el modelo de concierto es la alternativa que permitirá una financiación justa que mejorará la vida de los gallegos y las gallegas, ya que permitirá financiar unos servicios públicos de calidad y dinamizar los sectores productivos.

Por todo lo anterior, el Bloque Nacionalista Galego presenta la siguiente MOCIÓN:

«El Congreso insta al Gobierno a:

1. Cambiar lo antes posible un Sistema de Financiación autonómica caducado e ineficaz que, además, en el caso de Galicia, resulta claramente injusto y perjudicial y que ni siquiera pondera adecuadamente factores esenciales como la dispersión poblacional y el envejecimiento.
2. Negociar con el Gobierno gallego, de forma bilateral, las bases para el establecimiento de un nuevo modelo de financiación que permita a la Administración gallega recaudar todos sus impuestos, tener plena capacidad de decisión en materia fiscal y dotarse de una hacienda propia, con el objetivo fundamental de que los impuestos pagados en Galicia redunden en la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida y el bienestar de todos los gallegos y gallegas.
3. Apostar por un sistema tributario más justo, equitativo y redistributivo, que haga realidad el principio de que contribuya más quien tiene más capacidad económica.
4. Revisar y mejorar la financiación local y la participación de las Entidades Locales en los impuestos del Estado, asegurando criterios justos que no discriminen a nadie y velando por que los ayuntamientos no se vean obligados a asumir gastos extraordinarios por los denominados servicios impropios.
5. Hacer efectiva lo antes posible la quita de la deuda de las Comunidades Autónomas.



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO GENERAL

27 NOV. 2025 17:50:07

Entrada **91359**

MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE

Competencia
Tipo Expediente

Otros Expedientes
300-Escrito en lengua
española distinta del
castellano, oficial en
Comunidad Autónoma (art.
92.1)

Fdo.: Néstor REGO CANDAMIL
Portavoz Titular



Á MESA DO CONGRESO

O GP MIXTO, a instancia do deputado do **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)**, Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 184.2 do vixente Regulamento do Congreso dos Deputados, presenta a seguinte **MOCIÓN CONSECUCENCIA DE INTERPELACIÓN** ao Goberno **relativa á mellora do financiamento na Galiza** para o seu debate en PLENO.

Madrid, a 27 de novembro de 2025

Néstor Rego Candamil

Deputado do BNG

Portavoz do Grupo Mixto

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO GENERAL

27 NOV. 2025 17:50:07

Entrada **91359**



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O actual sistema de financiamento autonómico, regulado pola Lei 22/2009, de 18 de decembro, xunto coa LOFCA, é claramente prexudicial e inxusto para a Galiza, pois impón un evidente infrafinanciamento dos servizos que se mantén desde hai décadas. Unha insuficiencia de recursos que determina, tamén, que a Galiza se sitúe á cola do Estado español nos principais indicadores socio-económico a pesar de sermos un País rico en recursos e con inmensas potencialidades.

Da inxustiza do modelo dan conta distintos datos, como é que o peso da dispersión territorial é de apenas 0,6%, a pesar de ser este un factor que non é que aumente, senón que multiplica exponencialmente os gastos para alcanzar o mesmo nivel de servizos. Mais tamén cabe destacar que a Galiza representa apenas 5'8% do territorio do Estado español e 5,6% da poboación, no entanto, conta con metade dos núcleos de poboación do Estado e se falarmos de núcleos de menos de 100 habitantes a porcentaxe elévase a 60%. O efecto disto no custo dos servizos básicos é evidente, así por exemplo, co mesmo investimento que nos territorios de poboación concentrada é posíbel dar servizo de abastecemento ou saneamento de auga para 1000, 2000 ou 5000 persoas, na Galiza pode selo para 10, 20 ou 50. O mesmo acontece se falarmos de Sanidade, Educación, Atención á dependencia, coidados, ou servizos públicos de calquera tipo. E aínda así, a dispersión territorial pesa só 0,6% fronte a, por exemplo, 30% o número total de residentes. Unha situación que repercute de forma especialmente grave no caso das administracións locais que se ven na obriga de asumir moitos dos servizos básicos no seu territorio.

A Galiza ten, con 5,8% do territorio como foi apuntado antes, 50% dos quilómetros de estradas do Estado, a maioría de titularidade municipal ou provincial, unha realidade que implica un enorme custo en mantemento e un sobre esforzo que é preciso incorporar e compensar nos criterios de financiamento.



Aliás, mencionaremos tamén a insuficiente ponderación doutros factores, como o de poboación máis vella de 65 anos (só 8,5% de peso), cando a Galiza ten os índices de envellecementos máis elevados.

Todos os factores citados implican un evidente infrafinanciamento que non só resulta inxusto e discriminatorio, senón que incide moi negativamente na calidade de vida e benestar de todos os galegos e galegas. Uns datos que veñen confirmados no último Informe do Consello de Contas, de maio de 2024, que advirte dun infrafinanciamento de 1.535 millóns anuais. De feito, o órgano fiscalizador cifra en arredor de 20 000 millóns o déficit de financiamento autonómico da Galiza entre 2009 e 2021, o que suma un déficit medio anual por habitante de 559 euros. É máis, na senda de crecemento do financiamento autonómico que se mantivo até 2019, a Galiza foi das que menos creceu.

O Informe de Contas sinala, ademais, a falta de transparencia no actual modelo, o que evidencia que este debate non é técnico nin neutro, senón que se basea en criterios e decisións políticas. Como a que diferenciou entre Comunidades de réxime común e foral; a que determina a cesión de competencias e porcentaxes sobre certos tributos; a que fixa as distintas variábeis que inciden no cálculo de necesidades para o fornecemento dos servizos públicos fundamentais das Comunidades de réxime común e a súa ponderación en función do peso político exercido polas forzas predominantes en cada territorio; a que establece os a forma de distribución dos fondos de converxencia ou o volume total de recursos a repartir entre as Comunidades, sen relación co custo real das competencias transferidas ás Comunidades Autónomas.

Fica claro, por tanto, que as características do sistema de financiamento actual dependen da correlación de forzas políticas existente no momento da súa negociación e aprobación. A elaboración e utilización de informes técnicos ou académicos serviu apenas como un pretexto para xustificar posicións políticas ex ante.



Neste contexto, o BNG defende a necesidade, non xa de revisar o sistema, senón de mudar o modelo para a Galiza, apostando por un concerto económico, pois os datos avalan a proposta.

A Galiza está baixo a media estatal en PIB *per cápita* e, precisamente a ineficacia, insuficiencia e inxustiza do actual sistema de financiamento son os principais factores que reforzan a nosa vulnerabilidade e non resolven a falta de converxencia e a actual situación de atraso. Así, a realidade é que a diferenza entre os impostos estatais que pagamos na Galiza e o que o Estado nos devolve pola vía do financiamento supera os 5000 millóns de euros.

Segundo o balance do sistema de financiamento para a Galiza elaborado polo economista galego Xosé Díaz para o exercicio 2022, o Estado recadou na Galiza un total de 15.385 millóns de euros, porén o montante dos fondos que recibiu do Estado polo sistema de financiamento foi de 10.041 millóns. A diferenza alcanzou os 5.344 millóns de euros en favor do Estado. Considerando o período de vixencia do actual sistema de financiamento (2009-2022), totalizarían 59 391 M€ a prezos correntes.

Temos que tomar en conta, ademais, o chamado 'efecto sede', polo que case 4000 empresas que operan na Galiza pagan o Imposto de Sociedades fóra, fundamentalmente en Madrid. No concreto, 3787 empresas (1211 SA, 2560 SL e 16 cooperativas), que inclúen as enerxéticas, as de telecomunicacións, as grandes distribuidoras, as bancarias, as grandes e medianas empresas manufactureiras, as construtoras, as extractivas, etc. co seu domicilio fiscal fóra da Galiza. Por tanto, Madrid absorbe recursos producidos fóra, para logo sinalar que é a que máis contribúe, iso si cos lucros que as empresas recadan en territorios espoliados como o galego.

Acabar con este espolio fiscal permanente é a razón que leva o BNG a defender un modelo de concerto, perfectamente posíbel no marco xurídico-político actual -de facto está en vigor con evidente éxito nas dúas Comunidades de EuskalHerria- e, sen dúbida beneficioso para a Galiza. Un sistema no que, aínda



descontando a cota a sufragar polos chamados servizos comúns ou non transferidos, a Galiza sairía gañando.

O incremento de recursos dispoñíbeis para a Administración galega permitirían a mellora dos servizos públicos e elevar o nivel de vida e benestar de todos os galegos e galegas. Este é o obxectivo da proposta do BNG, con absoluta confianza na capacidade do noso País para se valer por si propio e para se autorresponsabilizar do seu futuro, tamén do punto de vista fiscal.

Galiza ten capacidade e debe ter, tamén, a facultade normativa e responsabilidade fiscal sobre o conxunto dos impostos soportados na Galiza para garantir a consecución dos principios de xustiza, proporcionalidade e progresividade fiscal. Isto non implica non ter que contribuír, caso de proceder, para un mecanismo de redistribución interterritorial, respectando o principio de solidariedade e, en todo o caso, considerando a débeda histórica en investimentos que ten o Estado coa Galiza.

O Ministerio avanzou na última reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira dun novo sistema “multilateral e bilateral”. Porén, o concepto de multilateralidade non é incompatible coa negociación bilateral entre as nacións como Galiza e o Estado. Galiza necesita exixir e exercer o dereito á soberanía fiscal. Unha reforma do sistema de financiamento actual que se limite á elevación da porcentaxe de cesión de determinados impostos estatais non é suficiente, pois seguiría a constituír un modelo que non consideraría a capacidade financeira total de Galiza, nin as súas necesidades reais.

Alén do máis, se falamos dos recursos dispoñíbeis para sufragar os gastos das administracións públicas da Galiza, non é menor a cuestión do financiamento local. En termos *per cápita*, cada concello galego recibe de media por habitante 50 € menos que a media estatal. A situación agudízase no caso das sete grandes cidades. A modo de exemplo, Málaga recibe o mesmo financiamento do Estado que as sete grandes cidades galegas xuntas, pese a que case a duplican en poboación. Unha fenda que se agranda máis se a comparación se fai entre o que recibe un concello galego por habitante e un municipio madrileño. Isto implica



142 euros máis, no caso madrileño, ou 108 euros máis, no catalán, que na Galiza. Resulta evidente pois que, tamén é preciso revisar e mellorar o financiamento local e a participación nos tributos do Estado.

Por último, é preciso tamén abordar posíbeis solucións para, no mínimo, aliviar, a situación de endebedamento da Galiza. Neste sentido, resulta incomprensíbel a negativa do Goberno da Xunta da Galiza, de beneficiarse da chamada 'quita' da débeda pública -pactada polo BNG e o PSOE no acordo de investidura-.

As contas públicas da Galiza de 2025 destinaron 1763 millóns de euros ao pagamento de débeda, dos cales, segundo a Lei de orzamentos, 214 millóns de euros permitirían sufragar os tipos de xuros derivados da débeda formalizada na súa maioría, con entidades bancarias privadas, e o resto á amortización da débeda -que a finais de 2024 ascendía a un total de 12 165 millóns de euros-.

Cabe destacar pois, que o custo da débeda galega é moi superior ao doutras Comunidades Autónomas, pois o executivo decidiu desbotar os mecanismos de financiamento extraordinarios públicos, como é o Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), unha liña de crédito creada polo Estado en 2012 para prestar diñeiro directamente ás comunidades autónomas, cuns tipos de xuro moito máis reducidos que os fixados polo sistema financeiro. Por tanto, a condonación permitiría reducir a partida reservada para o pagamento da débeda e incrementar, así, os fondos dispoñíbeis para gasto social, unha prioridade no noso País.

En conclusión, o BNG considera imprescindible establecer unha nova relación co Estado en materia de financiamento para pór fin ao centralismo financeiro e que a Galiza teña a capacidade de decidir sobre a totalidade dos seus recursos. Así, o modelo de concerto é a alternativa que permitirá alcanzar un financiamento xusto que mellorar a vida dos galegos e das galegas, pois permitirá financiar uns servizos públicos de calidade e potenciar os sectores produtivos.



Por todo o exposto anteriormente, o Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte MOCIÓN:

“O Congreso insta o Goberno a:

1. Mudar o antes posíbel un Sistema de Financiamento autonómico caducado e ineficaz que, ademais, no caso da Galiza resulta claramente inxusto e prexudicial e que nin sequera pondera adecuadamente factores esenciais como dispersión poboacional e envellecemento.
2. Negociar co Goberno galego, de forma bilateral, as bases para o establecemento dun novo modelo de financiamento que permita á Administración Galega recadar todos os seus impostos, plena capacidade de decisión en materia fiscal e dotarse dunha facenda propia, co obxectivo fundamental de que os tributos pagados na Galiza redunden na mellora dos servizos públicos e da calidade de vida e benestar de todos os galegos e galegas.
3. Apostar por un sistema tributario máis xusto, equitativo e redistributivo, que faga realidade o principio de que contribúa máis quen ten máis capacidade económica.
4. Revisar e mellorar o financiamento local e a participación das Entidades Locais nos tributos do Estado, asegurando criterios xustos que non discriminen ningúen e velando porque os concellos non se vexan na obriga de asumir gastos extraordinarios polos denominados servizos impropios.
5. Efectivizar o antes posíbel a quita da débeda das Comunidades Autónomas.